

# PUEBLOS INDÍGENAS: DEBATES Y PERSPECTIVAS

JOSÉ GABRIEL BAEZA ESPEJEL  
MARÍA GABRIELA GÓMEZ GUERRERO  
NOEMÍ ELENA RAMÓN SILVA  
coordinadores



*Pueblos indígenas : debates y perspectivas* / coord. José Gabriel Baeza Espejel, María Gabriela Gómez Guerrero, Noemí Elena Ramón Silva. – México : UNAM, Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial : Facultad de Derecho : Programa Universitario México Nación Multicultural, 2010.

711 p. ; 22 cm.

ISBN 978-607-02-2199-6

1. Indios de México – Identidad étnica. 2. Pueblos indígenas – Condición jurídica, leyes, etc. – México. 3. Indios de México – Relaciones con el gobierno. 4. Multiculturalismo – México. I. Baeza Espejel, José Gabriel. II. Gómez Guerrero, María Gabriela. III. Ramón Silva, Noemí Elena. IV. Universidad Nacional Autónoma de México. Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial. V. Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Derecho. VI. Universidad Nacional Autónoma de México. Programa Universitario México Nación Multicultural.

305.800972-scdd20

Biblioteca Nacional de México

Primera edición: 28 de febrero de 2011

D.R. © 2011 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Ciudad Universitaria, Delegación Coyoacán, 04510, México, D. F.

PROGRAMA UNIVERSITARIO MÉXICO NACIÓN MULTICULTURAL

FACULTAD DE DERECHO

DIRECCIÓN GENERAL DE PUBLICACIONES Y FOMENTO EDITORIAL

Prohibida la reproducción parcial o total por cualquier medio,  
sin autorización escrita del titular de los derechos patrimoniales.

ISBN: 978-970-32-1679-6 (obra completa)

ISBN: 978-607-02-2199-6 (tomo 25)

Impreso y hecho en México



# El estado de la regulación de los derechos indígenas en México

*Francisco López Bárcenas\**

La lucha de los pueblos indígenas de México por sus derechos no es asunto de los últimos años, sino bastante añejo. Viene aparejada con las luchas independentistas de la población de la Nueva España por separarse de la Corona española y formar un nuevo Estado; pasando por los “periodos de anarquía” y la consolidación del “nuevo orden”, durante el siglo XIX; se hizo presente durante las discusiones que generaron la elaboración y aprobación de la Constitución federal de 1857, lo mismo que la de 1917, sin que en ningún caso los constituyentes se convencieran de la necesidad de reconocerlos. En los últimos años se ha reflejado en diversas luchas que no cesan hasta el día de hoy, sin que tal reclamo encuentre una respuesta satisfactoria, porque, de una manera u otra, el Estado siempre ha buscado boicotear estos derechos.

## La exclusión de los derechos

La primer referencia a los derechos indígenas desde el nacimiento del Estado mexicano se encuentra en el Acta Constitucional de la Repúbli-

\* Centro de Estudios para el Desarrollo Rural y la Soberanía Alimentaria, Cámara de Diputados.

ca mexicana de 1824, donde se estableció como facultad del Congreso de la Unión arreglar el comercio con las naciones extranjeras, entre los diferentes estados de la federación y *tribus de indios*, disposición que se reiteró en el artículo 49, fracción XI, de la primer Constitución federal de México como país independiente, promulgada el 4 de octubre de 1824.<sup>1</sup> Una disposición fuera de contexto, que no respondía a una realidad social y por tanto ningún derecho representaba para los pueblos indígenas porque sus problemas iban más allá de asuntos comerciales. La única explicación coherente sobre la inclusión de esta disposición en la Carta Magna apunta a que fue copiada textualmente del artículo 1.8.3 de la Constitución federal de los Estados Unidos de América, en donde el Estado reconoció *status* jurídico a los indígenas, aún bajo su tutela.<sup>2</sup>

Los estados de la República también expidieron, a su manera, diversas leyes sobre la materia, sobre todo para fraccionar las tierras comunales y desconocer los gobiernos propios de los pueblos. Así sucedió en los estados de Oaxaca, Occidente —compuesto por lo que hoy son los estados de Sonora y Sinaloa—, Chihuahua, Veracruz, Zacatecas, Jalisco, Chiapas, Guanajuato, Tabasco, Coahuila y Texas, Nuevo León, entre los más conocidos. La abundante legislación indígena de esta época no fue para reconocer derechos sino para negarlos.<sup>3</sup> Para mediados del siglo XIX, cuando se discutió la Constitución federal de 1857 se volvió a debatir sobre el tema, pero a pesar de las múltiples intervenciones para que se legislara reconociendo algunos derechos, fundamentalmente de la tierra, se impuso la visión liberal de esa época y el asunto se dejó para tiempos mejores.

<sup>1</sup> Jorge Sayeg Helú, *El nacimiento de la República federal mexicana*, México, SEP-Setentas, 1974, pp. 115-123.

<sup>2</sup> Salvador Bartolomé Clavero, *Teorema de O'Reilly: Incógnita constituyente en indoamérica*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, separata de la *Revista española de Derecho Constitucional*, año 17, núm. 49, 1997, p. 44.

<sup>3</sup> Francisco López Bárcenas, *Legislación y derechos indígenas*, México, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural y la Soberanía Alimentaria-Cámara de Diputados, 2006, pp. 27-42.



En la sesión del 16 de junio de 1856, el diputado José María del Castillo Velasco, después de describir los estragos padecidos por “una raza desgraciada de hombres, que llamamos indígenas, descendientes de los antiguos dueños de estas ricas comarcas, y humillados ahora con su pobreza infinita y sus recuerdos de otros tiempos”, reivindicó terrenos para el uso común de sus pueblos, así como para reparto entre los individuos que los integraban, aduciendo que era vergonzoso “para nuestro país que haya en él pueblos cuyos habitantes no tengan un espacio de terreno en que establecer un edificio público o una sementera”; así también exhortó a los legisladores a tomar medidas para combatir el estado de mendicidad de los indígenas y a “disipar los nublados de su indigencia”. Además de ello, el diputado Velasco expresó su convicción de que urgía remediar los abusos que sufrían y buscar la manera de mejorar su condición económica, afirmando que “si se estudian sus costumbres, se hallarán entre los indios, instintos de severa justicia y de abnegación para cumplir con los preceptos que imponen las leyes”.<sup>4</sup>

Tres semanas después de expuestas las anteriores opiniones, el diputado García Granados formuló algunas objeciones en materia de justicia en donde se involucró a los pueblos indígenas: desaconsejó la instauración del jurado popular, calificándolo de “planta *ecsótica*” que no podía aclimatarse todavía entre los indígenas porque, según él, no ofrecían ninguna garantía de defensa a las personas que juzgaban. En la misma sesión Ignacio Ramírez destacó la necesidad de que el proyecto constitucional que se estaba discutiendo se adecuara mejor a las necesidades específicas del país. En ella lamentó que “entre las muchas ilusiones con que nos alimentamos, una de las no menos funestas es la que nace de suponer que nuestra patria es una nación homogénea”. Invitó a los diputados a cambiar su visión del país. “Levantemos —les dijo— ese ligero velo de la raza *mista* que se *estiede* por todas partes y encontra-

<sup>4</sup> Manuel Ferrer Muñoz y María Bono López, *Pueblos indígenas y Estado nacional en el siglo XIX*, 1998, pp. 50-52.

remos cien naciones que en vano nos esforzaremos hoy por confundir en una sola". Y, a diferencia de quien le antecedió en la palabra, expresó: "Muchos de esos pueblos conservan todavía las tradiciones de un *origen* diverso y una nacionalidad independiente y gloriosa".<sup>5</sup>

Una de las últimas intervenciones sobre la materia se dio cuando ya se había iniciado, en lo general, el debate sobre el contenido de la nueva Constitución. El diputado Castellanos aceptó la nobleza de la propuesta hecha por el diputado José María del Castillo Velasco, pero se opuso a ella si antes no se aseguraba que la Iglesia quedaría sujeta al poder del Estado, pues en caso contrario —dijo— los "indios regarán la tierra con el sudor de su rostro, trabajarán sin descanso hasta hacerla fecunda, le llegarán a arrancar preciosos frutos, y todo ¿para qué?, para que el clero llegue como ave de rapiña y les arrebate todo, cobrándoles por el bautismo de sus hijos, por celebrar su matrimonio, por dar sepultura a sus deudos". Y terminaba con una sentencia que cambió el rumbo de la discusión. "Dad a los indios la tierra y dejad subsistentes las obvenciones parroquiales, y no haréis más que aumentar el número de esclavos que acrecienten la riqueza del clero".<sup>6</sup> Con esta afirmación, la discusión de los derechos indígenas pasó a un segundo plano, centrándose en el problema del clero y su relación con el Estado. Fue así como los derechos indígenas se discutieron pero no se plasmaron en la Constitución que consolidó al Estado mexicano.

Estas fueron algunas de las razones para que en 1910, cuando estalló la Revolución en contra de la dictadura porfirista, los indígenas se fueran a la guerra esperanzados en recuperar su patrimonio. Pero las promesas no cumplieron las expectativas de los pueblos indígenas: el derecho de restitución de la tierra del cual fueron despojados, lo plasmó el Congreso Constituyente en el artículo 27 de la norma suprema

<sup>5</sup> *Idem.*

<sup>6</sup> *Idem.*

elaborada en Querétaro el año de 1917,<sup>7</sup> mas no con sus características de territorialidad sino en calidad de ejido o comunidad agraria. Además de esto, en el mencionado artículo se reservó para la nación la propiedad originaria de las tierras y aguas, con lo cual mantuvo el principio del derecho de conquista, esgrimido por la Corona española en el siglo XVI para justificar la usurpación de las tierras indígenas.

Pero si en aquel tiempo dicho principio se justificó por ser los que detentaban el poder unos invasores que se imponían por la fuerza, no se justificaba ahora que los indígenas habían participado en la guerra para recuperar sus tierras, y debió el Congreso atenerse al principio de los derechos adquiridos, por haber ocupado los indígenas estas tierras antes que otros que reclamaran igual derecho, es decir, antes de que se formara el Estado que ahora desconocía sus derechos. Pero no lo hizo.

Asimismo, el ejercicio del poder local se concentró en el municipio, declarándolo base de la organización política del país, prohibiendo cualquier forma de organización local diversa, lo mismo que la existencia de un poder intermedio entre el poder municipal y los gobiernos estatales o federales.<sup>8</sup> Ciertamente es que con esta medida se buscaba terminar con las nefastas jefaturas del Porfiriato que restringieron los derechos políticos de los mexicanos, pero lo correcto hubiera sido distinguir entre éstas y los gobiernos propios de los pueblos indígenas para no dejarlos en la ilegalidad, condenados a desaparecer.

Las anteriores soluciones no atendían a las necesidades de los pueblos indígenas y por lo mismo no resolvían sus problemas. En primer lugar, la vía legal para que los pueblos indígenas accedieran a la tierra era la comunidad agraria o el ejido, pero ni todas las comunidades agrarias que se constituyeron fueron indígenas, ni todas las comunidades indígenas eran agrarias; al lado de ellas también existieron y existen

<sup>7</sup> "El artículo 27 de la Constitución de 1917", en *Los derechos del pueblo mexicano: México a través de sus constituciones*, 2a ed., tomo IV, México, Manuel Porrúa, 1978, pp. 640-702.

<sup>8</sup> "El Artículo 115 de la Constitución de 1917", en *op. cit.*, tomo VIII, pp. 293-425.



comunidades agrarias formadas por mestizos, lo mismo se encuentran pueblos indígenas que por una u otra razón quedaron dentro del régimen agrario ejidal o de la pequeña propiedad.

Por otro lado, el municipio se constituyó tomando en cuenta las relaciones que los grupos de poder locales establecieron con el poder regional, del estado y aun el nacional, pero nunca atendiendo a las condiciones de los pueblos indígenas. Todavía más, al constituirse los municipios se les despojó prácticamente de todos los poderes que antes habían ejercido, reservándoles sólo los servicios públicos. Por eso hoy todavía los pueblos y comunidades indígenas reclaman la devolución de sus tierras y el reconocimiento de sus territorios; al mismo tiempo que luchan por espacios de poder en donde desarrollarse como pueblos, como sujetos de derechos colectivos. En conclusión, la Constitución de la República emanada de la Revolución de 1917, aun cuando ha sido calificada de muy avanzada en derechos sociales, siguió ignorando nuestra existencia en el país y sólo legisló sobre nuestro derecho de acceso a la tierra.

Terminada la Revolución, el nuevo Estado implementó una serie de instituciones y políticas que en lugar de reconocer los derechos de los pueblos indígenas buscaban desaparecerlos para integrarlos a la nación. La más importante fue el Instituto Nacional Indigenista, creado en 1938 para diseñar e instrumentar la política gubernamental hacia los pueblos indígenas. Con el paso del tiempo, las diversas dependencias del gobierno federal descargaron en él las responsabilidades que les correspondían a ellas, a grado tal, que en lugar de integrarlas en la práctica generaron una política de exclusión de los pueblos indígenas de la vida nacional.

### La simulación de los derechos

Fue hasta el año de 1992 cuando el gobierno federal —aprovechando la cercanía de los 500 años de la invasión española al continente americano— promovió una adición al artículo 4 de la Constitución federal

para reconocer la existencia de pueblos indígenas en su seno y garantizar sus derechos. Eso fue lo que se nos dijo, pero en el decreto del 28 de enero de 1992 lo que se publicó fue una norma declarativa de la pluriculturalidad de la nación mexicana, misma que obtenía su sustento en la presencia originaria de los pueblos indígenas. El reconocimiento que se hacía en esa norma era como componente de la pluralidad cultural de la nación, y sólo de manera indirecta se podía establecer la consideración de los pueblos indígenas como sujetos de derecho. Es más, la propia norma jurídico-constitucional restringía los derechos que se les pudieran reconocer a los pueblos indígenas, a los de carácter cultural, y sólo a aquellos que la ley secundaria eventualmente llegara a establecer. Se seguía en la lógica de negar los derechos políticos y económicos, que son los fundamentales para la existencia de los pueblos indígenas, el respeto de sus derechos y la seguridad de su existencia y desarrollo futuro.

Lo mismo que con el artículo 4 sucedió con la fracción séptima, párrafo segundo, del artículo 27 constitucional, reformado por decreto del 6 de enero de 1992, en el cual se establece que “la ley protegerá la integridad de los grupos indígenas”.<sup>9</sup> En primer lugar esta norma desconoce la condición de pueblos a los indígenas reduciéndolos a minorías. Esto que en lenguaje común pudiera parecer una nimiedad, para el derecho es muy importante porque a las minorías deben aplicárseles políticas de discriminación positiva para ayudarles a igualarse con el resto de la población, mientras a los pueblos se les debe reconocer tal naturaleza, junto con su derecho a decidir libremente su condición política, económica, política, cultural y social, que son los derechos reconocidos en el sistema internacional hace bastante tiempo.

En el plano internacional hubo algunos avances en relación con las normas jurídicas sobre el tema, algunas de esas normas no directamente referidas a los derechos colectivos de los pueblos indígenas, sino

<sup>9</sup> *Diario Oficial de la Federación*, México, 6 de enero de 1992.

a minorías étnicas o a quienes las integraban, pero que a falta de mejor instrumento intentaban cubrir esa carencia. Nueve años antes de la reforma de 1992, el gobierno mexicano había suscrito los Pactos de Derechos Económicos y Sociales y el de Derechos Civiles y Políticos, documentos que en su artículo primero reconocen el derecho de los pueblos a la libre determinación, de manera general, para todos los pueblos. En 1990 suscribió el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, documento en el que de manera concreta se reconoce a los pueblos indígenas y sus derechos, entre ellos los territoriales, políticos, económicos, culturales y jurisdiccionales. De igual manera, en el año de 1993 suscribió el Convenio sobre Diversidad Biológica, donde se establecen algunos lineamientos para proteger la biodiversidad y los conocimientos de los pueblos indígenas sobre ella, sobre la base de la conservación, la consulta previa y el reparto equitativo de beneficios.<sup>10</sup>

Producto de la reforma constitucional y del mencionado tratado internacional, el Estado mexicano comenzó a introducir reformas en diversas leyes federales y estatales hasta conformar un abundante cuerpo legislativo sobre la materia. Dentro de las leyes federales reformadas se cuentan los códigos: Penal para el Distrito Federal en materia del Fuero Común y para toda la República en materia del Fuero Federal, y Federal de Procedimientos Penales. En cuanto a derechos sobre recursos naturales se modificaron las leyes: General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, Agraria y sus reglamentos, así como la Forestal. Asimismo, relativos a derechos culturales se reformaron las leyes: General de Educación y su reglamento, y la Federal de Derechos de Autor. Por último, en materia administrativa se contempla la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Sólo que en esta legislación a los pueblos indígenas se les sigue negando el derecho de decidir por ellos mis-

<sup>10</sup> Francisco López Bárcenas, *op. cit.*



mos su futuro, tratándolos como si no existieran, y cuando se les reconocen algunos derechos se hacen desvirtuando su carácter de pueblos, como si fueran minorías a las que hay que ayudar a que se integren a la “cultura nacional” y por ese camino desaparecerlos. Los estados de la federación no se quedaron atrás. Hasta 1996 había 12 constituciones estatales modificadas para introducir en ellas derechos para indígenas: Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Querétaro, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Estado de México y Durango. De manera general se puede afirmar que todas se ciñeron a los contenidos de la reforma constitucional, ignorando los compromisos internacionales del Estado mexicano en esta materia.

Además de las insuficiencias de las leyes, ninguna institución de gobierno se reformó para hacer posible su ejercicio, por lo que quedaron como letra muerta. Dos ejemplos: la legislación penal se reformó desde el año de 1985, incorporando el derecho del indígena procesado a contar con un traductor o intérprete y a que se tomen en cuenta sus usos y costumbres, pero hasta la fecha no existe institución alguna que preste estos servicios, y los jueces carecen de todo conocimiento sobre los usos y costumbres. Asimismo, la legislación sobre derechos de autor incorporó, a principios de la década de los noventa el derecho de las comunidades indígenas a registrar sus obras; sin embargo, en la Dirección General de Derechos de Autor no realizan dicho trámite porque no existe una sección para ello.

### La sumisión de los derechos al capital

La reforma más reciente a la Constitución federal se realizó el día 14 de agosto del 2001. En su origen, la reforma tenía como finalidad incorporar a la Constitución federal el contenido de los Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena, más conocidos como Acuerdos de San Andrés, firmados entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y

el gobierno federal, para poder arribar a una paz justa y digna en Chiapas. Ese propósito no se logró porque el Estado mexicano, a través de los poderes federales se negó a cumplir esos acuerdos y en su lugar promovió una reforma que ni reconoció los derechos indígenas ni contribuyó a lograr la paz buscada.

De esta reforma lo que más se cuestionó fueron dos aspectos que afectaron al sujeto titular de los derechos y el derecho al territorio, ambos muy importantes para la existencia de los pueblos indígenas pero también para la vigencia de los derechos. En el primer caso, el cuestionamiento venía del hecho de que no se reconociera a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, es decir, como parte de los órganos de gobierno del Estado mexicano, sino como sujetos de interés. Del segundo se impugnó el hecho de que no se reconociera expresamente el derecho al territorio, sino la posibilidad de acceder, de manera preferente, a los recursos existentes en los lugares que ocupan o habitan de alguna manera.<sup>11</sup> No está de más decir que el contenido de la reforma impugnada, además de no satisfacer las demandas de los pueblos indígenas, contravenía los artículos primeros de los Pactos de Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, de la Organización de Naciones Unidas, así como los artículos 1, 13, 14 y 15 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo.

Después de la firma y ratificación del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, así como la reforma constitucional de 1992 y luego la del 2001, se han venido introduciendo en la legislación federal, igual que en las de las entidades federativas, una serie de modificaciones con la idea de reglamentar los derechos indígenas, lo que ha dado lugar a una abundante legislación sobre la materia.

<sup>11</sup> *Idem.*

Sólo para efectos explicativos, las leyes federales se pueden agrupar en materias tales como el derecho al desarrollo, derechos sobre las tierras y recursos naturales, derechos culturales, acceso a la justicia ante los órganos del Estado y la institucionalidad estatal. Entre las primeras se encuentra la Ley General de Desarrollo Social y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. En el segundo grupo se incluyen la Ley Agraria, la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable y la Ley Minera. Dentro del grupo de derechos culturales se ubican la Ley General de Educación y la Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. En el grupo de derechos de acceso a la justicia, se incorporan el Código de Procedimientos Civiles, el Código Federal de Procedimientos Penales y el Código Penal Federal.

Un grupo aparte lo integran las leyes que regulan el funcionamiento de las instituciones indigenistas entre las cuales se encuentra la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, el Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, el Reglamento Interior de la Procuraduría Agraria, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el Acuerdo que crea la Fiscalía para Asuntos Indígenas.

Un bloque diferente lo constituyen las leyes de los estados de la República. En él se incluyen 18 textos constitucionales, cinco leyes reglamentarias y en varios estados diversas disposiciones sobre derechos indígenas.<sup>12</sup>

Lo abundante de las disposiciones jurídicas no debe llevarnos a la conclusión de que se reconocen gran parte de los derechos indígenas porque no es así, ya que si bien la Constitución federal reconoce la existencia de los pueblos indígenas y algunos de sus derechos, deja afuera

<sup>12</sup> *Idem.*



los principales, como el de ser sujetos de derecho público y el control de sus territorios y los recursos naturales en ellos existentes. Derivado de lo anterior, quedan fuera del reconocimiento constitucional los gobiernos indígenas y las facultades que éstos tendrían, para marcar los alcances y límites de sus actuaciones. Además, la misma Constitución federal remite a las legislaturas estatales la facultad de reconocer los alcances de los derechos enunciados en ella.

Otra razón para que no sea una legislación aceptable es que la mayoría de la legislación federal y estatal fue aprobada antes de la reforma del 14 de agosto del 2001 y, como tal, su contenido se ajusta a los contenidos de las disposiciones constitucionales de 1992, de corte culturalista. Vaya un ejemplo para ilustrar lo anterior: de los 18 textos constitucionales estatales, 14 fueron aprobados antes de la reforma del 2001 y sólo cuatro después de ella, las cuales, en la mayoría de los casos copian las disposiciones de aquélla. Así, de los 32 estados de la República sólo cuatro tienen actualizados sus textos a lo que dispone la Constitución federal, y en muchos casos sus disposiciones son nulas de pleno derecho por tratarse de materias reservadas para su aprobación por el Congreso de la Unión y no por los estados de la República.

Pero existe otro problema mayor. La legislación federal aprobada con posterioridad a la reforma constitucional demuestra que la negación del Estado para reconocer la personalidad jurídica de derecho público y los derechos territoriales de los pueblos indígenas no fue un problema de desconocimiento del tema, sino la posibilidad de abrir paso a una política estratégica de privatización de los recursos naturales, específicamente las tierras, las minas, los recursos forestales, el agua, los recursos genéticos y el conocimiento tradicional asociado a él. Así lo demuestran las reformas que se han realizado a las leyes que regulan esas materias, las que invariablemente desregulan la materia, de tal manera que las transnacionales puedan intervenir libremente. En este aspecto, no se puede afirmar que estas leyes cumplan con la normativa internacional que el

Estado mexicano se ha obligado a respetar, por el contrario, representan una violación por lo menos de la II Parte del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la OIT, el artículo 8j del Convenio sobre Diversidad Biológica, el artículo 27.b.3, del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, más conocidos como TRIP, por sus siglas en inglés. Para completar el cuadro están pendientes de aprobarse una Iniciativa de Ley Federal de Acceso y Aprovechamiento de los Recursos Genéticos, una reforma a la Ley de Propiedad Industrial, ambas para permitir la patentabilidad de los recursos genéticos y el conocimiento tradicional asociado a ellos; dos iniciativas sobre conocimiento tradicional indígena y dos más sobre consulta y participación indígena, que además de apartarse de lo establecido por el artículo 6 del Convenio 169, imposibilita la representación directa de los pueblos indígenas.

## Conclusiones

De lo expuesto se puede concluir que la apertura del Estado mexicano para reconocer derechos indígenas, iniciada en la década de los años noventa, producto de los reclamos del movimiento indígena y de la necesidad del Estado para emprender reformas estructurales que afectaban sus derechos sociales, comienza a cerrarse para dar paso al saqueo de los recursos naturales por parte del capital, mayoritariamente trasnacional.

Así, conceptos como pueblo indígena, autonomía, derecho al territorio y los recursos naturales en ellos existentes, tan debatidos y en muchas ocasiones celebrados en declaraciones y tratados internacionales, en la legislación y la práctica política interna del Estado mexicano se vuelven frases huecas, pues se les usa pero de tal manera que no representan ningún derecho, y si llegaran a representar alguno se cuida bien que no puedan ejercerse.

Los derechos son sometidos por el capital. Con lo cual queda claro que los derechos indígenas son un obstáculo para la globalización neoliberal, y como tal, para que sean una realidad, los pueblos indígenas tienen que luchar contra ella. No es un asunto menor, ciertamente. Pero la experiencia de los pueblos indígenas en su milenaria resistencia, así como las múltiples formas de lucha que han desarrollado a partir de su propia cultura representan una esperanza de vida para no ser derrotados.

## Bibliografía

- Clavero Salvador, Bartolomé, *Teorema de O'Reilly: incógnita constituyente en indoamérica*, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, separata de la *Revista española de Derecho Constitucional*, año 17, núm. 49, 1997.
- Ferrer Muñoz, Manuel y María Bono López, *Pueblos indígenas y Estado nacional en el siglo XIX*, 1998.
- López Bárcenas, Francisco, *Legislación y derechos indígenas*, México, Centro de Estudios para el Desarrollo Rural y la Soberanía Alimentaria-Cámara de Diputados, 2006.
- Sayeg Helú, Jorge, *El nacimiento de la República federal mexicana*, México, SEP-Setentas, 1974.